

Lucha política y movilizaciones sociales en Michoacán, 1988-1989

Eduardo Nava Hernández

Escuela de Economía, UMSNH

La lucha electoral de 1988 motivó en todo el país la movilización social, la rearticulación de las fuerzas políticas y el cuestionamiento del régimen político de partido estatal. Especialmente, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano despertó a muy amplios sectores populares a la participación política y reorganizó sus luchas centralizadamente.

Si bien se trata de un fenómeno de carácter nacional, en algunas regiones el movimiento cívico se expresó con peculiar vigor y logró no sólo arrancar al sistema triunfos electorales de importancia, sino estructurarse en torno a un programa político y a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Dentro de estas regiones destaca Michoacán, donde el FDN como expresión de la Corriente Democrática logró triunfar en 12 de los 13 distritos electorales en disputa, en las dos senadurías y en la candidatura presidencial cardenista.

Antes del mismo 6 de julio Michoacán había vivido un clima de enfrentamiento político del gobierno estatal con la corriente cardenista y las organizaciones populares independientes que se agruparon alrededor de ésta. El gobernador Martínez Villicaña lanzó una campaña de hostigamiento y acoso contra la Corriente Democrática y sus

• Ponencia presentada en el Segundo Coloquio de Jalapa: "Reestructuración productiva y reorganización social".

aliados que tensó al máximo las fuerzas en esa contienda electoral. La votación del 6 de julio, completamente adversa al PRI y al gobierno local, en proporción de casi tres por uno, dio un vuelco a la situación en favor de las bases cardenistas y fuerzas populares, que se expresó en tres niveles:

- a) El cuestionamiento y aislamiento político del régimen en Michoacán;
- b) una nueva configuración político-partidaria; y
- c) un ascenso de la movilización social y las luchas de clases en diversos terrenos: conflictos municipales, agrarios, movimiento magisterial, reorganización de agrupaciones urbano-populares y luchas sindicales en prácticamente todas las regiones del estado.

Entre otras consecuencias políticas deben contarse la virtual desarticulación del PRI y de su aparato corporativo y la caída del gobernador Martínez Villicaña en diciembre de 1988.

Lo que explica la nueva situación detonada en 1988 es la conjunción de diversos elementos: en primer lugar, el arraigo político del cardenismo como ideología nacionalista de base popular; en segundo lugar, la presencia del grupo de Cuauhtémoc Cárdenas que dos años atrás había gobernado el estado y controlaba gran parte del aparato priísta en la entidad; y finalmente, la preexistencia de una amplia red de movimientos populares campesinos, urbanos y sindicales, que desde años atrás venían organizando a diversos sectores de la sociedad desde las bases.

Por eso, el régimen no pudo sobreponerse al golpe recibido en el 1988 y en el siguiente enfrentamiento, las elecciones legislativas locales de 1989, recurrió al fraude como principal método para conservar el control del aparato legislativo.

El fraude electoral del 2 de julio, sin embargo, tiene consecuencias políticas adversas al PRI y al sistema en su conjunto, pues pone en evidencia las limitaciones del ofrecimiento de reforma electoral hecho por el presidente Salinas de Gortari y socava aun más la legitimidad política de los gobernantes. Por otro lado, evidencia las flaquezas del proyecto partidario en la defensa consecuente de la voluntad popular. El movimiento social tiende a desplegarse, así, nuevamente en dos planos: el de las pugnas electorales y el de las luchas reivindicativas y democratizadoras de los sectores organizados de la sociedad.

Tras de la tempestad, el huracán

Las jornadas electorales de 1988 fueron, según se ha vuelto ya un lugar común, un cataclismo que sacudió vertiginosamente, desde su cúspide, al sistema político todo, produciéndole fisuras, cuarteaduras y desprendimientos. Usos y costumbres que se habían fijado durante décadas en la cultura de la dominación en México se vieron repentinamente cuestionados y modificados por el ascenso del movimiento social, vinculado a la oposición política, que se desató con las campañas presidenciales. Como consecuencia, el régimen no ha dejado de resentir las presiones de diversos sectores de la sociedad para su transformación en un sentido democrático.

En especial, el impulso de la campaña cardenista tuvo diversos hitos de entronque con las masas que señalan con toda nitidez su trayectoria ascendente: la Comarca Lagunera, el mitin en la UNAM, Michoacán, los mítines poselectorales en la ciudad de México... Configurado como un movimiento cívico nacional, el cardenismo se expresó con particular vigor en algunas regio-



nes, donde la ruptura con el prisma asumió un carácter masivo y radical.

En Michoacán, la corriente cardenista obtuvo el 6 de julio un triunfo absoluto al ganar no sólo la mayoría para el candidato presidencial, Cárdenas, sino las dos senadurías y 12 de las 13 diputaciones federales en disputa. Pero además fue la entidad donde la insurgencia cívica adquirió una estructura más sólida y donde hasta hoy, a través de diversas coyunturas, la movilización social se ha mantenido con más fuerza.

Ciertamente, la situación dada en Michoacán no podría tomarse como modelo para el resto del país, pues aquí han confluído elementos muy particulares de naturaleza regional; pero tampoco puede verse, como lo ha venido sosteniendo la propaganda oficial, como una experiencia absolutamente excepcional y aislada. Dada la crisis política por la que atraviesa el régimen y que se

ha manifestado en diversas formas desde hace varios años —Chihuahua en 1983 y 1986, Baja California, La Laguna, por no hablar sino de las crisis electorales del PRI— más bien debe ser vista como expresión extrema de tendencias que en otras regiones se presentan más difusas e inorgánicas.

Aquí se examinará la experiencia regional vivida desde las elecciones federales de 1988 hasta las legislativas locales de 1989, analizando particularmente las consecuencias que la ruptura michoacana ha tenido para el sistema político, la sociedad y el Estado. Se intentarán algunas hipótesis explicativas de la insurgencia cardenista y se buscará concluir explorando a la luz de esta experiencia local las perspectivas y limitaciones de la llamada transición democrática, como parte del necesario debate acerca de la reestructuración o modernización del sistema político nacional.

Neocardenismo y lucha política

La postulación de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia, la integración del Frente Democrático Nacional en torno a su candidatura y la campaña electoral fueron sin duda elementos medulares del radical viraje de las masas michoacanas contra el PRI y en favor de la nueva alternativa política de centro-izquierda representada por el cardenismo. Había razones evidentes para este vuelco. La presencia reciente de Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno estatal había reavivado en el pueblo de Michoacán el fervor cardenista presentándose aparentemente como una reedición del gobierno nacionalista protagonizado por su padre medio siglo atrás. También le permitió a Cárdenas contar no sólo con una base social amplia sino con un aparato propio, constituido por dirigentes locales y cuadros medios provenientes del PRI. No fue gratuito que la Corriente Democrática naciera públicamente en Michoacán presentando en Morelia, apenas 15 días después de que Martínez Villicaña asumiera el gobierno, en septiembre de 1986, su primer documento de trabajo.¹

Como a la postre se demostró, este hecho no tuvo simplemente una significación conyuntural. Fue, más que nada, un acto de renacimiento, el resurgir de una forma de conciencia social popular —identificada con un sustrato democrático, nacionalista y benefactor— y su reencuentro con una corriente definida que la venía a personificar. Tampoco fue accidental, entonces, que al frente de esta corriente se colocara Cuauhtémoc Cárdenas, y que poco tiempo después ésta fuera asumiendo el título de *neocardenista*.

El neocardenismo surgió del divorcio irreconciliable entre la tecnoburocracia gobernante, encabezada primero por De la Madrid y después por Salinas de Gortari, y la facción más ortodoxa del nacionalismo revoluciona-

rio. Frente a un proyecto de gobierno al que caracterizan como desnacionalizador, autoritario y antipopular, la corriente nacionalista respondió levantando la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas con propuestas centrales como la "recuperación de la soberanía nacional", la protección del mercado interno, la redistribución del ingreso en favor de los trabajadores, la defensa del ejido y del estatismo. Con el desarrollo de la campaña y la adhesión social en torno suyo, se agregaron también demandas más particulares recogidas de la izquierda y de los movimientos reivindicativos.

Por su composición política, esta corriente se presentó como un frente electoral aglutinado en torno a la figura de Cárdenas, e integrado por tres (finalmente cuatro, con la incorporación del PMS) partidos con registro legal y una diversidad de agrupamientos sociales.

Como gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas logró imprimir un estilo peculiar, con algunos rasgos avanzados —como una política de redistribución del gasto estatal hacia los municipios más rezagados— y con un marcado carácter populista —como en las audiencias públicas semanales donde el gobernador atendía directamente las peticiones de los ciudadanos y en ocasiones repartía dinero a los solicitantes—. Sin embargo quedó, como gobernante, muy lejos de colmar las expectativas que la población puso en él como candidato y de modificar duraderamente las condiciones políticas y sociales de la entidad. En su sexenio los conflictos agrarios proliferaron y dirigentes campesinos —señaladamente los de San Felipe de los Alzati— permanecieron encarcelados por conflictos de tierras con el capital. Dos de sus más importantes proyectos políticos, la Ley Estatal de Educación y la democratización de la Universidad Michoacana se malograron. La primera generó un grave conflicto con las asociaciones de padres de familia, las escuelas privadas y la Iglesia, y nunca

llegó a tener vigor; en la universidad, deficiencias técnicas de la nueva Ley Orgánica universitaria, introducidas por el gobierno de Cárdenas, ocasionaron la lucha interna entre las diversas fuerzas, lo cual propició la intervención regresiva del nuevo gobierno de Martínez Villicaña para superar el conflicto.

En lo electoral fueron constantes las impugnaciones y acusaciones de fraude por la oposición,² y la inconformidad de las bases priistas en la designación de candidatos. Como presidente del PRI estatal, Francisco Xavier Ovando fue paradigma de corrupción asignando candidaturas al mejor postor.³

Todo ello no impidió que en las elecciones presidenciales de 1988 el pueblo no sólo optara sino se volcara masivamente en favor de la candidatura cardenista. Pesaron decisivamente al menos tres factores en el estado de ánimo de los electores: en primer término, la identificación popular espontánea con el cardenismo y su revitalización personificada en el hijo del general; en segundo lugar, el nuevo carácter opositor de la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas, que removió las fibras profundas de la cultura política antigubernista y logró presentarse como una opción alternativa, de cambio; y en tercer lugar, el rechazo popular a la actitud política y al gobierno de Luis Martínez Villicaña, que con sus obras y palabras ofendió durante cada uno de los días de sus mandatos al pueblo de Michoacán.

Desde que se formó la CD y durante la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, Martínez Villicaña endureció su postura. Inició su gobierno haciendo una "limpia" de cardenistas y despidiendo de los puestos públicos a los firmantes de todos los niveles del Documento de Trabajo. La abierta entrega del gobierno estatal al capital exacerbó los conflictos en el campo. Los dos años del villicañismo se caracterizaron por el asedio político al cardenismo en todos los frentes.

A estos factores debe añadirse un hecho más. Hay indicios que permiten suponer que ya durante su gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas realizó acciones tendientes a crear bases para una corriente política propia. En la presidencia del PRI estatal colocó a sus colaboradores más cercanos, como Francisco Xavier Ovando y Cristóbal Arias, aun cuando éstos no tuvieran vinculación con los sectores del partido ni la presencia y los méritos suficientes. Expresó públicamente su oposición, cosa inusual en esos momentos, a la intervención de los delegados del CEN del PRI en los estados,⁴ y convocó en vísperas de la postulación del nuevo candidato a gobernador a la renovación de los comités municipales. Hoy a pocos conviene recordar que Cristóbal Arias se mantuvo hasta el final como presidente del PRI durante la campaña de Luis Martínez Villicaña. Éstos, entre otros rasgos, dan fe de una clara intención de Cárdenas de conservar en sus manos la estructura del partido.

Por eso, con la emergencia de la CD en 1986 y la salida de Cárdenas del PRI en 1987, el partido tricolor quedó virtualmente desarticulado en el nivel municipal en Michoacán. Si en julio de 1988 se pudo lograr el respeto al voto de los michoacanos y el reconocimiento de los triunfos del cardenismo, fue en gran medida porque a las filas de éste se incorporaron la gran mayoría de los cuadros medios y dirigentes del PRI en el nivel municipal; el PRI se vació y no alcanzó a reestructurarse desde las bases para esa contienda. Así, la campaña presidencial de Cárdenas se convirtió en una experiencia de masas desde su inicio, en Morelia, el 29 de noviembre de 1987. Sus momentos culminantes fueron los mítines de Apatzingán y Uruapan, en mayo de 1988, y el cierre de campaña en Pátzcuaro, donde quedó perfectamente claro que la relación de fuerzas en el estado era completamente favorable al candidato del FDN.

El 6 de julio y sus consecuencias

Desde las vísperas del 6 de julio, el proceso electoral quedó empañado con el asesinato en la ciudad de México de Francisco Xavier Ovando, uno de los colaboradores más próximos del candidato del FDN desde su periodo de gobierno en Michoacán.

Ovando, figura revelante del equipo cardenista, tuvo, sin embargo, muy poca proyección política más allá de los límites de Michoacán —donde fungió como procurador de justicia, presidente del PRI estatal, diputado federal y director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión— y no se le conocían enemigos que no fueran políticos. Desde un año antes, en junio de 1987, había denunciado el acoso y las amenazas recibidas contra su vida, e identificado a quienes lo amagaban como agentes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán.⁵ En el momento de morir se encargaba del centro de cómputo del FDN que sistematizaría los resultados de la elección del 6 de julio.

En los funerales de Ovando, Cuauhtémoc Cárdenas denunció el manejo irregular de boletas electorales en Michoacán y presentó pruebas, algunas de ellas pertenecientes al VII distrito, con cabecera en Tacámbaro. Como respuesta, el PRI estatal denunció que los partidos del Frente Democrático habían participado en el manejo de paquetes electorales y la Procuraduría de Justicia detuvo al dirigente parmista de ese distrito, Luis Meza García. Al quedar libre, éste declaró que había sido torturado por el procurador José Franco Villa, quien lo amenazó: "te va a pasar lo que a Ovando". Así, todo hacía ver que se preparaba un fraude de gran envergadura en Michoacán y que el hostigamiento del gobierno estatal hacia la Corriente Democrática de Cárdenas alcanzaba su máximo nivel.



Sin embargo, la votación del 6 de julio dio a la situación un vuelco. Los 414 mil sufragios recibidos por Cárdenas contra los 142 700 de Salinas rebasaron con mucho los más pesimistas pronósticos del PRI. Ni la intimidación ni el fraude fueron suficientes para impedir la catastrófica derrota que el recién llegado a la oposición le infligía a su antiguo partido. Michoacán se demostraba una vez más cardenista, y una vieja y nueva correlación de fuerzas políticas se hacía presente. Poco a poco, los cómputos la iban dando a conocer: para Cárdenas, el triunfo rotundo en la elección presidencial, para los candidatos del FDN —provenientes todos ellos, salvo uno, de la Corriente Democrática— las dos senadurías y 12 de las 13 diputaciones en disputa.

Los triunfos del Frente Democrático fueron celebrados en la calle, y la gente lanzó duras proclamas contra el gobierno estatal: "¡Gobierno, borracho, que al pueblo tratas gacho!" La movilización popular obligó a reconocer, con tomas de alcaldías y plantones, los triunfos frentistas en algunos distritos, como en el de Tacámbaro, donde el PRI intentó hasta el último momento sostener el pretendido triunfo del líder estatal de la CNC, Roberto Garibay Ochoa, anulando las casillas del muni-

cipio de Churumuco y alterando las votaciones en San Lucas y Turicato. En algunas regiones, como la Meseta Purépecha, el cardenismo alcanzó hasta un 80% de lo votos.

Casi en ningún distrito, sin embargo, se obtuvo el reconocimiento de los triunfos sin movilización. En los días que siguieron a la elección hubo marchas y plantones en Morelia, Tacámbaro, Uruapan, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Churumuco, Ciudad Hidalgo, Zacapu, Apatzingán, Los Reyes y prácticamente todas las cabeceras distritales. Finalmente, el 13 de julio, el gobernador Martínez Villicaña reconoció públicamente el triunfo rotundo del FDN de Cuauhtémoc Cárdenas.

La voltereta del 6 de julio fue en Michoacán, como en otras regiones del país, un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas, no sólo entre dos partidos o grupos políticos en pugna por el poder, sino también entre la sociedad y el Estado. En ningún lugar, como aquí, el cambio fue tan drástico ni tuvo —por circunstancias de carácter local— efectos tan radicales y duraderos. Regionalmente ha sido el punto de inflexión para una nueva situación que se expresa en tres niveles:



- a) El aislamiento político del gobierno y de su partido;
- b) una nueva configuración del sistema de partidos; y
- c) la emergencia del movimiento social popular, el cual ha desatado una respuesta de tendencia desestabilizadora por parte de los grupos afectados.

a) *El aislamiento del régimen*

El efecto más inmediato y visible de la contundente victoria cardenista de 1988 fue, evidentemente, el desmoronamiento de la autoridad gubernamental. Del gobierno local de Martínez Villicaña, en primer lugar, pero también del Gobierno Federal entrante de Carlos Salinas de Gortari, manchado por el fraude y sospechoso de ilegitimidad. Pese a que el gobernador negó siempre que el resultado electoral fuera una expresión adversa a su administración, este hecho fue reconocido por algunos de los sectores más lúcidos del prisma, que percibieron la voluntad de cambio patentizada en el voto de los michoacanos.⁶

La degradación del poder de Martínez Villicaña —inversamente proporcional al acrecentamiento del prestigio de Cuauhtémoc Cárdenas—, se gestó no sólo en el escándalo que rodeó permanentemente a su persona y a su gobierno, sino en el desgaste en que entró al intentar confrontar al grupo neocardenista. Como Villa en las batallas del Bajío, Martínez Villicaña lanzó cargas de caballería contra las subterráneas trincheras donde se protegían profundos sentimientos y convicciones populares, y fue derrotado. Su errónea táctica frontal se estrelló contra la expresión de resistencia y solidaridad que fueron los comicios.

Aun después del 6 de julio prosiguió el clima de enfrentamiento entre el gobierno estatal y el cardenismo. El 15 de agosto, en Apatzingán, el palacio muni-

cipal fue saqueado e incendiado después de que el FDN realizó ahí un mitin. El gobierno y el PRI intentaron culpar a los cardenistas del vandalismo. La acusación no prosperó. Éstos denunciaron, con respaldo de la población, que grupos de jóvenes provocadores traídos de fuera habían cometido los actos delictivos. Marcelo Valencia, coordinador del FDN en Apatzingán, se declaró en huelga de hambre hasta el esclarecimiento de los hechos. Unos días después, los actos vandálicos se repitieron en Tocuambo, sin que el gobierno lograra fincar responsabilidades.

En Churumuco, los cardenistas ocuparon la presidencia municipal; exigen la renuncia del alcalde Obed Ramírez, acusado de prepotencia y de haber impedido la votación el 6 de julio en la localidad. En otros municipios, los campesinos también se movilizaron hasta lograr la deposición de los titulares: Ecuandureo, Tumbiscatío, Tanhuato, Villa Morelos, Santiago Tangamandapio, Ocampo, Jungapeo, Francisco J. Mújica... En Ecuandureo, el nuevo alcalde designado por el Congreso estatal no logró sostenerse ni 15 días. En Churumuco la movilización popular obligó finalmente a designar a un cardenista como presidente. En Ocampo, la policía municipal disparó contra los frentistas encabezados por el diputado federal Hiram Rivera Teja, y varias semanas después, ahí mismo, priistas agredieron a algunos cardenistas, y ocasionaron un enfrentamiento en el que murió una joven y cinco personas más resultaron heridas.

Para septiembre, cuando el gobernador rindió su Segundo Informe de Gobierno, era evidente la insalvable brecha entre Martínez Villicaña y la población del estado. Ni siquiera el nuevo tono mesurado y conciliador —contrastante con la retórica agresivamente anticardenista de un año antes— que asumió en su segunda comparecencia ante el Congreso estatal atemperó la candente situación política. Su caída era inevitable.

Dos mítines en la capital y la toma de alrededor de 50 presidencias municipales,⁷ a partir del 26 de noviembre, marcaron la ofensiva final de los cardenistas y el ocaso del gobierno villicañista, en vísperas del cambio de poder en el Gobierno Federal. Al asumir la Presidencia Salinas de Gortari retiró a Martínez Villicaña y lo puso al frente de una empresa paraestatal. De las acciones tendientes a deponer al gobernador se excluyeron, sin embargo, dos de los partidos de FDN: el PPS y el PFCRN, debido a que las tomas de alcaldías no fueron consultadas con ellos; el PMS las avaló a regañadientes, y el PAN externó fuertes críticas. Sólo la CD y el PARM participaron activamente.

En las tomas de alcaldías se combinaron, en muchos casos, la presión —dirigida desde el centro del país— contra Martínez Villicaña y la protesta legítima contra las autoridades municipales denunciadas por corrupción, por agresiones a los cardenistas o por su acción fraudulenta en la elección del 6 de julio. Por todo esto se explica que muchos de los plantones no se levantaran con la renuncia del gobernador. En Nueva Italia (Múgica), Yurécuaro, Maravatío, Paracho, Cherán, Tangamandapio, Tepalcatepec, Jiquilpan, Erongarícuaro, Santa Clara, Nahuatzén y otras localidades, las manifestaciones de rebeldía se mantuvieron durante semanas y aun meses después del 4 de diciembre. En total 33 alcaldes fueron impugnados por las bases cardenistas.

Por eso tampoco el relevo de Martínez Villicaña por Genovevo Figueroa era garantía de reestablecimiento para el gobierno y el PRI. El mes de julio significó un cambio cualitativo en la conciencia de la población michoacana, más que la protesta contra un mal gobernador. Fue un rechazo generalizado a los métodos de gobierno, a la corrupción, a las prácticas corporativas, al dedazo y el compadrazgo, que rebasó incluso a la plata-

forma política del cardenismo y se transformó en acción popular democratizadora desde las bases.

Por eso, las corporaciones campesinas oficiales: CCI y CNC, se convirtieron en meros cascarones y entraron en estado de coma, y los campesinos parceleros y comuneros pasaron a ser la base social más amplia y combativa del cardenismo virtualmente en todos los municipios del estado.

A Genovevo Figueroa⁸ le tocó el serio reto de asumir la gubernatura interina en las condiciones más adversas: en medio de un desprestigio general del régimen, con el aparato partidario dismantelado y una población movilizada en todas las regiones. El PRI tenía que enfrentar, además, en el corto plazo, un nuevo proceso electoral, el de diputados locales en julio. No logró salir airoso.

b) La nueva configuración política

Políticamente, la nueva relación de fuerzas se expresó en un hecho social significativo: el desplazamiento del PRI y de las opciones de la derecha, PAN y PDM, por la coalición electoral de centro-izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.

Hasta antes de 1988, Michoacán era un estado de los considerados fáciles para el PRI. Las estadísticas electorales mostraban como constante a un PRI que obtenía siempre porcentajes de votación superiores a sus promedios nacionales y los partidos de oposición —con la única excepción del PDM— por debajo de sus indicadores nacionales respectivos. El abstencionismo dominaba, casi siempre superaba las dos terceras partes del padrón. En las zonas rurales la presencia opositora fue siempre débil (en las elecciones municipales de 1986 no se registraron planillas opositoras en 36 municipios y en muchísimos otros el PRI tuvo que contender con sólo uno

de los partidos de oposición). Todos los partidos y observadores ajenos al PRI coinciden en señalar en esas regiones la persistencia sistemática del fraude en los resultados atribuidos al partido oficial.

Si algo parecido a la competencia electoral existía, era entre el PRI y el PAN, particularmente en la región de Zamora-Jacona y algunos otros municipios urbanos como Uruapan, Morelia y Zacapu. Apoyándose en sectores medios emergentes, el PAN logró ganar los ayuntamientos de Zamora en 1983 y 1986, Zacapu en 1980, Uruapan en 1983 y Jacona en 1986, y la diputación federal del V distrito con cabecera en Zamora, en 1985.

La elección federal de 1988 representó un brusco viraje, de un incipiente bipartidismo PRI-PAN en el estado, hacia una confrontación entre el PRI y el cardenismo (FDN primero, y luego PR), que marginó a todas las otras opciones. Los candidatos cardenistas cosecharon el 62.3% de los sufragios, frente al 24.0% del PRI y el 11.3% del PAN.⁹ Un partido antes inexistente en Michoacán, como el PARM, se transformó repentinamente en la primera fuerza electoral, al adjudicarse el 37.0% de los votos.¹⁰

Junto con el PRI, el otro perdedor neto de la elección de 1988 fue el PDM. El partido del gallito había venido siendo un partido en expansión lenta pero sostenida, con porcentajes de votación crecientes, que llegó a tener dos triunfos municipales reconocidos: San Juan Nuevo Parangaricutiro, en 1983, e Indaparapeo, en 1986. En las elecciones federales de 1988 se tuvo que conformar con un modesto 2.2% de los votos —muy inferior al 3.6 de la elección anterior— y, lo que es peor, perdió el registro para seguir participando en las elecciones siguientes. Es indudable que en regiones como la meseta purépecha, donde conservaba cierta influencia, muchos de sus votantes lo desairaron para optar por el cardenismo.



Igualmente la izquierda no cardenista, o convertida al cardenismo en último momento, es decir, el PRT y el PMS, retrocedió drásticamente en términos electorales, de manera que el conjunto de la votación cardenista fue captada por el PARM, el "Frente Cardenista" y el PPS, en ese orden. La carta propagandística fuerte de los parmistas era mostrar copias de la cédula de afiliación de Cuauhtémoc Cárdenas a su partido.

Ello quiere decir que, aunque rechazando al PRI con radicalidad, los michoacanos dieron su voto a las opciones más centristas y moderadas e identificadas más directamente con los símbolos propios del cardenismo de ayer o del neocardenismo de hoy.

La inercia de 1988 —y acaso alguna dosis de confusión, aunque poco significativa— permitió a los partidos del ex FDN conservar los márgenes de votación

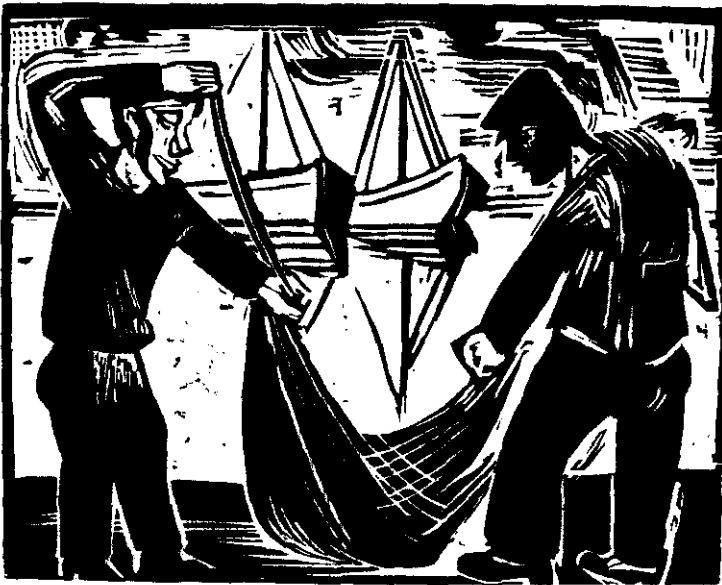
suficientes para alcanzar diputados de representación proporcional en los comicios de 1989. Para el futuro próximo, sin embargo, la polarización de la lucha política entre PRI y PRD hace difícil a ambos partidos la conservación de esas bases. Ubicados nuevamente en la perspectiva de desaparecer por la disolución del FDN, su carácter paraestatal ha tendido a reforzarse a medida que retornan a su condición de pigmeos políticos natos.

c) El ascenso del movimiento popular y de las luchas de clases

Efecto y causa a la vez del ascenso electoral de las masas, el movimiento social ha resurgido a través de su rearticulación en diversos frentes. Las reverberaciones del 6

de julio se conservaron y amplificaron en diversos sectores, y se expresaron en situaciones de conflicto con los cacicazgos, el PRI, los gobiernos municipales priistas y el gobierno estatal. El efecto del 6 de julio fue el reforzamiento de la confianza del pueblo en sus propias fuerzas para emprender nuevas tareas: la destitución de Martínez Villicaña, las elecciones legislativas de julio de 1989 y la lucha por reivindicaciones democráticas y sociales. Quizás en ninguna otra entidad la onda expansiva popular se mantuvo con igual vigor y continuidad.

En algunos casos, la movilización reivindicativa surgió vinculada a procesos extrarregionales de carácter nacional (el movimiento del magisterio); en muchos otros (los conflictos municipales) la dinámica estuvo determinada sustancialmente por factores de índole lo-



cal. De cualquier manera, es evidente la existencia de una nueva situación que empieza a superar el reflujo en que el movimiento de masas había entrado desde varios años atrás.

En principio, la movilización aparece directamente vinculada a la coyuntura política de 1988. A medida que avanza la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, algunos grupos campesinos que se van sumando a ella rompen con las centrales oficiales: CNC y CCI. En abril de ese año, núcleos de todo el estado se aglutinan en la naciente Central Campesina Cardenista.¹¹ Otros organismos vinculados a los partidos del FDN, como la Federación de Mujeres Insurgentes y la Juventud Cardenista de México, también pudieron crecer rápidamente, si bien no en todos los casos conservaron su militancia.

Las movilizaciones municipales, plantones y tomas de alcaldías —que se inician desde la coyuntura electoral de 1988 y se repiten tras el fraude de julio de 1989— son la representación más directa y manifiesta de la participación de las bases ciudadanas en la política, y se orientan en todos los casos contra el priísmo. Aunque desatados a veces por la dirección partidaria *frentista* o *perredista*, tienen un componente indiscutible de espontaneidad y en él fincan su fuerza. Tras el fraude electoral del 2 de julio, en Morelia, el senador Cristóbal Arias intenta levantar el plantón instalado frente al Palacio de Gobierno. No lo logra, como tampoco lo lograrán otros dirigentes. La razón es muy sencilla: el plantón está ahí no por decisión de las cumbres partidarias, sino de quienes lo sostienen con su presencia cotidianamente. Igualmente, las tomas de alcaldías cobran su propia dinámica. Aunque convocadas por la dirección con propósitos políticos muy precisos —la caída de Martínez Villicaña, la denuncia del fraude electoral, la desaparición de poderes en el estado—, pronto se orientan a enfrentar a las propias autoridades municipales y a exigir su destitución. Tres meses

después del 2 de julio, 30 presidencias siguen tomadas por la población, pese al repliegue ordenado por la dirigencia perredista. En algunos casos, como en la meseta purépecha, los campesinos afirman que no las entregarán sino a los nuevos alcaldes electos democráticamente en los comicios de diciembre.

En Michoacán, la construcción del nuevo partido de Cuauhtémoc Cárdenas se transforma en un proceso de masas que implica simultáneamente la ruptura y desmembramiento del PRI desde sus bases. En sus asambleas distritales constitutivas, el PRD afilia a más de 100 ciudadanos. Asisten 100 delegados efectivos a la Asamblea Nacional celebrada en mayo de 1989.¹²

Las bases cardenistas se organizan en prácticamente todos los municipios, mientras el PRI no logra rearticularse para las elecciones legislativas de julio. En Uruapan, un acto de campaña presidido por Donald Colosio con sectores populares de la CNOP no logró reunir ni a 100 asistentes.¹³

En Gabriel Zamora (Lombardía), para realizar un mitin con su presidente nacional, el PRI tiene que acarrear a dos mil simpatizantes de fuera de la región, en medio de la toma de la alcaldía y desafiando una concentración masiva de cardenistas.¹⁴

El debilitamiento y, en algunas regiones, virtual desmoronamiento de las corporaciones campesinas oficiales, se reflejó en la agudización de las pugnas agrarias y en la mayor iniciativa de diversos grupos de solicitantes de tierras. El dirigente de los pequeños propietarios de Michoacán, Antonio Correa López, declaró, por ejemplo, que "a raíz de las elecciones de julio del año anterior se ha acentuado sensiblemente el fenómeno de las invasiones a las pequeñas propiedades por parte de campesinos auspiciadas por el FDN", y advirtió que de no poner los gobiernos federal y estatal una solución al problema, "puede desatarse una ola de violencia en el agro michoacano".¹⁵

En agosto de 1988, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) realiza en Morelia plantones y ejerce otras formas de presión para exigir la solución de diversos problemas agrarios, el cese de la violencia contra las comunidades campesinas y la libertad de comuneros presos por el gobierno de Martínez Villacía. Desde entonces, las movilizaciones realizadas por esta organización en Morelia, otras regiones del estado y el Distrito Federal han sido múltiples y constantes, incluyendo marchas, plantones y tomas de oficinas públicas.¹⁶ Estas movilizaciones han logrado, sobre todo, la liberación de algunos campesinos presos, como los de Ocumicho y de San Bartolo Cuitareo.

Pero esta exacerbación de las luchas agrarias se ha manifestado también en el asesinato y encarcelamiento de un mayor número de campesinos relacionados con conflictos por tierras, entre ellos Elpidio Domínguez Castro y Rosalío Lucas Domínguez, de la comunidad de Santa Fe de la Laguna; Ismael Marmolejo Martínez y Francisco García Martínez, de la comunidad de Achotán en Coahuayana; José Ramírez Verduzco, de la comunidad de San Miguel de Aquila; y el de Juvenal Guido Ponde, de Pedernales, en el municipio de Tacámbaro. Hay a la fecha un buen número de campesinos presos de diversos núcleos agrarios, como de Joya Grande, municipio de Villa Madero, de San Bartolo Cuitareo, municipio de Hidalgo, de lejido Piedras de Lumbre, del municipio de Jungapeo, de La Carbonera, también del municipio de Hidalgo, y de la comunidad indígena de Nahuatzén, en el municipio del mismo nombre. En algunos casos, las sentencias a los campesinos van de 7 a 11 años de prisión, y se mantiene una gran cantidad de órdenes de aprehensión contra comuneros y ejidatarios.

En las ciudades es notable el resurgimiento del movimiento de colonos. En el último año se integran las organizaciones Colonias Unidas del Sur, en Morelia, y

la Coordinadora de Oriente, en Zitácuaro, y se rearticula después de un periodo de decaimiento la Coordinadora de Colonias Populares, en Lázaro Cárdenas.

El 6 de julio de 1988 se constituyó el Frente Democrático de Trabajadores de la Educación, como facción opositora al Comité Ejecutivo de la sección XVIII del SNTE, y durante las movilizaciones magisteriales de abril y mayo de 1989 se incorporaron a las demandas planteadas nacionalmente muchísimas delegaciones sindicales que conforman el Movimiento Democrático del Magisterio. En estas jornadas se logró la convocatoria a un congreso extraordinario para cambiar el Comité Ejecutivo Seccional. En octubre de 1989 este sector se encontraba nuevamente movilizado y en paro parcial; exigía el respeto a los procedimientos democráticos y desconocía al Comité Ejecutivo que mediante una maniobra pretendían imponer el Comité Nacional y los charros locales vinculados a Vanguardia Revolucionaria en la sección XVIII de Michoacán. En marchas, tomas de edificios sindicales, plantones y mítines actuaron decenas de miles de profesores; constituyeron sin duda uno de los focos de tensión en el estado durante 1989.

Igualmente, la revisión contractual de la sección 271 del Sindicato Minero, en Sicartsa, mostró en ese año una gran combatividad y capacidad de resistencia de los trabajadores en defensa de su contrato colectivo. En este conflicto, en que los obreros enfrentaron directamente la política industrial de reconversión del Gobierno Federal, las movilizaciones —desalojos de esquiroleros, cierres de carreteras que paralizaron virtualmente toda la planta industrial del puerto Lázaro Cárdenas, huelgas de hambre colectivas—, se evidenció la solidaridad popular de la región hacia los minero-metalúrgicos, proveniente de trabajadores de otras empresas y pobladores de las colonias populares. Tras 60 días de huelga, el

sindicato logró desmontar la estrategia de la empresa, de la Secretaría del Trabajo y de su propio Comité Nacional, y preservar en lo esencial el contenido del contrato colectivo.

Se trata no sólo de la huelga más prolongada de las cuatro que ha enfrentado esta empresa siderúrgica, sino también de la más combativa y radical. El triunfo minero se sobrepone a los intentos de esquirolaje, a la complicidad del dirigente nacional del sindicato con la empresa y a la declaratoria de inexistencia de la huelga emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a través de la movilización masiva de los 5 mil sindicados. Y ese triunfo se basa en la recuperada confianza de las masas para derrotar a la parte patronal, del mismo modo que unos meses antes lo habían hecho los trabajadores de otra gran industria de la región, la Factoría de Bienes de Capital NKS.

También en el sector educativo, la Normal Rural de Tiripetío, que sostuvo una prolongada lucha de tres meses para impedir su desaparición, y el Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) se mantienen como núcleos combativos.

La movilización social en el estado presenta un complejo y heterogéneo mosaico de conflictos. Muchos de ellos, evidentemente, sin relación directa con los procesos electorales ni con la lucha política por el poder, y son ajenos a la dinámica de los partidos.

Algunos movimientos se enfrentan a la política de organismos federales, otros entran en contradicción con intereses muy locales (caciques, terratenientes), y algunos más desafían al gobierno estatal. Dentro de esa diversidad, sin embargo, las luchas sectoriales del último año y medio presentan tres rasgos comunes:

- a) Su acentuado rechazo al prísmo y a lo que se identifique con el "gobierno";

- b) su tendencia a estructurarse formando verdaderas organizaciones sociales diferenciadas y contrapuestas a los aparatos oficialistas (incluso en los sindicatos nacionales: el Frente Democrático de Trabajadores de la Educación, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el magisterio, o el rebasamiento del Comité Nacional por los obreros de Sicartsa); y
- c) su vinculación horizontal intersectorial de carácter frentista, ya sea en escala estatal o regional.

En los municipios y regiones, estos movimientos han ido encontrando sus puntos de unidad. En Michoacán, los vientos de cambio de 1988 cobraron la fuerza de un huracán que azotó demoledoramente estructuras de poder y métodos de control vigentes durante décadas. Las secuelas del 6 de julio, como las de un terremoto, han seguido sacudiendo los edificios antes firmes del aparato estatal. A diferencia de otras entidades donde la explosión cívica no se articuló y entró en reflujo en breve tiempo, en Michoacán la viveza del movimiento popular ha mantenido durante un año y varios meses el desafío a la hegemonía del PRI en la sociedad y en los sectores populares en particular. El golpe recibido por éste no le ha permitido aún sobreponerse.

El neocardenismo y las masas

De las interpretaciones que se han difundido del fenómeno neocardenista emergido en 1988, la más mal intencionada y simplista es la que lo ha querido presentar como un mero acto reflejo, atávico, en el que las masas, sobre todo campesinas, fueron imantadas no por un proyecto ni por una ideología sino por un nombre que trajo el recuerdo de gestas pretéritas, ya históricamente

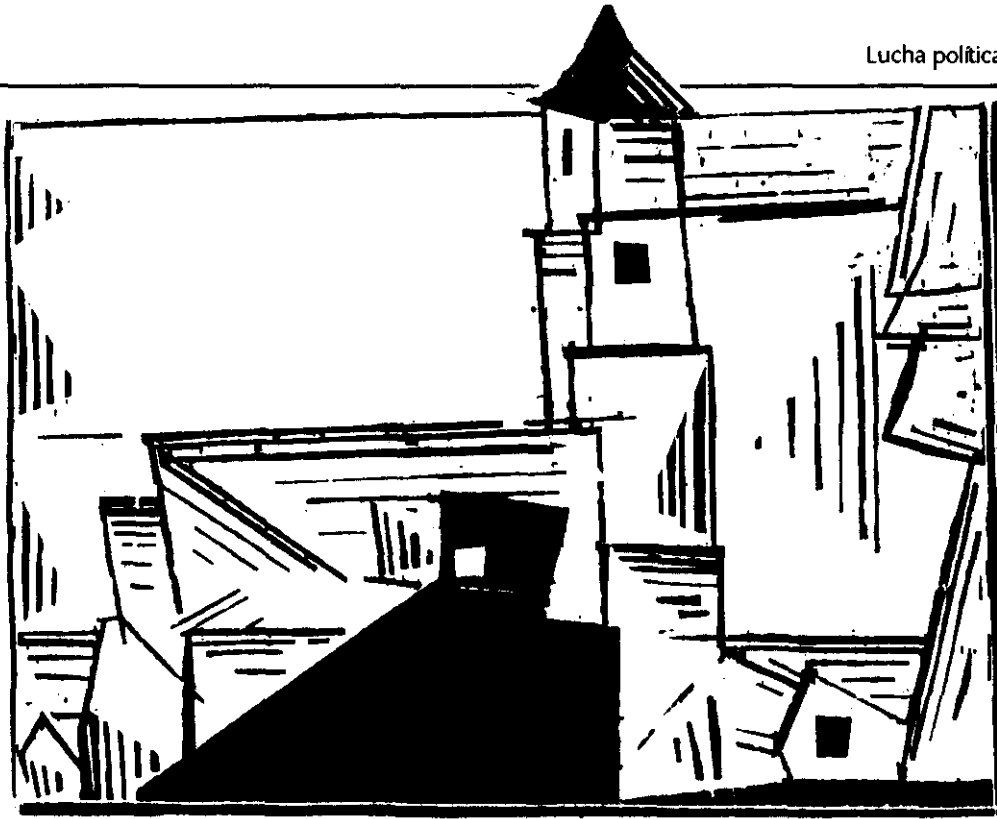
rebasadas. Ésa ha sido la versión más socorrida por el partido oficial para explicarse y justificar públicamente su derrota en las elecciones presidenciales, particularmente en el estado de Michoacán.¹⁷

En Michoacán, se ha dicho, el pueblo se orientó, para sufragar, por alguna suerte de memoria colectiva que evocó mecánicamente la imagen del General Cárdenas y la transfirió a su descendiente. No votó contra el PRI ni contra el gobierno, sino simplemente por algo así como un espejismo que cobró dimensiones sociales, aunque pasajeras.

Esta simplificación extrema e intencionada, si bien recoge aspectos reales, no da cuenta de la dialéctica, mucho más compleja, contenida en el fenómeno cardenista.

Igualmente, conviene prevenir contra la confusión en que se puede incurrir, con respecto a la diferencia entre las bases sociales del cardenismo y su caracterización política.¹⁸ La esencia del neocardenismo no es la expresión de los intereses de los sectores más rezagados del proceso de acumulación, señaladamente los campesinos minifundistas que lo nutren, sino los de una facción de la burocracia política mexicana, históricamente forjada, partidaria del capitalismo de Estado o de la política del Estado benefactor y opuesta a la lógica privatizadora del neoliberalismo.

Dada la escasa industrialización de Michoacán en lo general, y en concreto la dominante campesina del *segmento que se moviliza* en trono a Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, ha sido fácil incurrir en el cliché de que Cárdenas sólo ejerce un influjo en esos grupos sociales marginados. Esta visión olvida que, tanto en 1988 como en las elecciones legislativas de 1989, la corriente neocardenista ganó en las ciudades medias del estado y en los enclaves industriales: Lázaro Cárdenas, Zacapu y Morelia.



Ni generación espontánea ni acto reflejo. El neo-cardenismo michoacano debe ser visto como un fenómeno más complejo en el que coinciden en realidad distintos factores.

Desde luego, no se puede dejar de lado la significación política de masas que el cardenismo tiene en el nivel regional. Aquí, el cardenismo se transforma en una verdadera forma de cultura política compartida socialmente, pero sobre todo por las clases populares.¹⁹ El cardenismo como componente del discurso oficial permitió al sistema, durante décadas, canalizar y promover las demandas sociales de obreros y campesinos, por lo cual se convirtió en un método de organización de la hegemonía estatal. Pero por su origen y tradición está profundamente arraigado en las luchas y movilización

del pueblo michoacano desde los años veinte, sobre todo las luchas por la tierra; y es esta doble significación la que explica el papel subversivo que desempeña el cardenismo de los ochenta. Es indudable que para amplios grupos del pueblo michoacano, la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas apareció como una promesa fincada en la evocación del General que repartió los latifundios, expropió bienes en favor de la nación y se preocupó por mejorar la condición de las clases necesitadas.

En Michoacán, la significación del cardenismo como fenómeno popular ya era conocida, no por lo que el General Cárdenas hizo en materia de institucionalización política y consolidación del Estado, sino por haber abierto un periodo en el que la presencia de las masas



fue decisiva. El cardenismo encarna, en la memoria popular, el punto culminante de la etapa reformadora de la Revolución mexicana que los campesinos y obreros impulsaron con sus luchas desde varios lustros antes y en la que irrumpieron como fuerza organizada para alcanzar conquistas por las que ya habían anticipado un alto precio. En esa medida, modificó la relación entre gobierno y gobernados, entre el poder y las masas, y dio lugar a una nueva politicidad que el pueblo asimiló y conservó como profundo sedimento ideológico y espiritual en sus sucesivas movilizaciones.

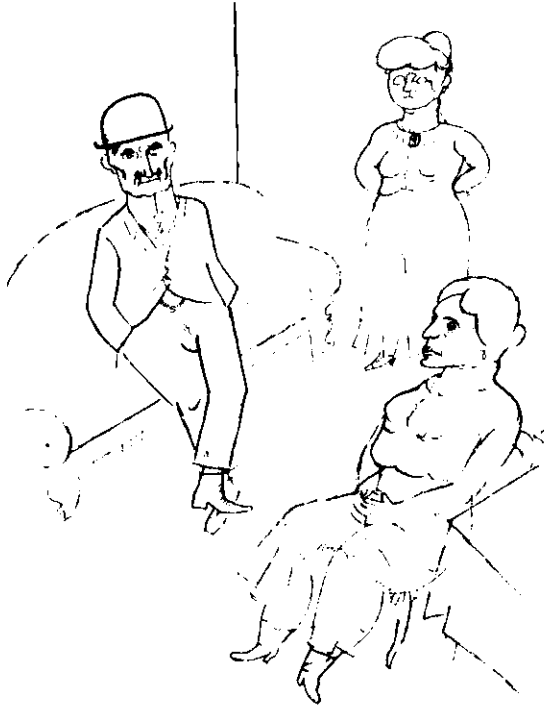
Sin embargo, más allá de esa difusa conciencia de raigambre popular, en el ascenso opositor convergieron ingredientes más concretos que permitieron darle consistencia y organicidad.

En ningún otro lugar como en Michoacán la escisión de la Corriente Democrática del PRI implicó a un conjunto de cuadros medios y dirigentes partidarios que durante un periodo de seis años tuvieron en sus manos el aparato político para reorganizarlo de acuerdo con sus propios fines.

El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán se apoyó en un equipo constituido simultáneamente por algunos cuadros de tradición cardenista anterior (la minoría) y por políticos jóvenes de nuevo cuño (la mayoría). La fórmula de senadores michoacanos integrada por Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias Solís es la expresión más sintética de ambos grupos, caracterizados por su cercanía con Cuauhtémoc Cárdenas.

Al momento del cisma en el priísmo, el grupo cardenista conservaba en sus manos gran parte de los comités municipales del partido y ayuntamientos, esto es, una estructura orgánica de la que podía disponer para articularse por todo el territorio del estado, y había desarrollado una política de activismo y acercamiento con las bases. La separación final de Cárdenas de su partido representó así un verdadero desmoronamiento del PRI (desde las bases y órganos medios), el cual no estaba en capacidad de revertir este proceso en un plazo tan corto.

Finalmente, hay que destacar el papel del movimiento popular independiente. El flujo someramente reseñado en el apartado anterior no es en sí el resultado de la sola coyuntura abierta en 1988, sino de la combinación de ésta y de la preexistencia, desde más de una década atrás, de los embriones y organismos representativos de la movilización independiente. En Michoacán, la izquierda social, ajena a la dinámica de partidos las más de las veces, había sentado amplias bases en torno a las reivindicaciones populares. Pocos estados del país presentan una extensión y diversidad



del movimiento popular y una dinámica de conflictos sociales semejantes.

Aquí, la insurgencia campesina y obrera cobra dimensiones realmente sociales en algunas regiones; el movimiento urbano tiene presencia en casi todas las ciudades medias de la entidad.

Los frentes de lucha comienzan a gestarse desde el periodo de gobierno de Carlos Torres Manzo, en los años setenta, el cual se caracterizó por su rigidez y despotismo ante las demandas de la población; pero es en la etapa de Cuauhtémoc Cárdenas cuando muchos de ellos alcanzan su maduración gracias a que fueron tolerados políticamente, aunque hubieran enfrentado la línea de mediatización y no solución a los problemas que ese

gobierno presentaba. Entre 1974 y 1980 tienen lugar las dos primeras huelgas en la empresa Sicartsa (1977-1979), mismas que contribuyen a dar al sindicato su fisonomía clasista e independiente. También tuvieron lugar luchas agrarias como las de Zirahuén, Santa Fe de la Laguna y San Isidro Alta Huerta, así como la fundación, en octubre de 1979, de la UCEZ. En 1975 se organiza la colonia Unión Popular Solidaria, de Morelia, y emergen en Uruapan las organizaciones de colonos como la Rubén Jaramillo, la Vicente Guerrero, la Genaro Vázquez y la "28 de octubre". También surgen los sindicatos universitarios y los núcleos disidentes magisteriales. Muchos de estos organismos, desde luego, no asumirán su perfil de polos de organización social sino varios años más tarde, sobre todo en el primer tercio del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

En esos años, la UCEZ efectúa movilizaciones decisivas por conflictos como los de Tarejero, Huerta de Gámbara, Zirahuén, San Miguel de Aquila y San Felipe de los Alzati, que la llevan a enfrentar intereses capitalistas muy poderosos. En algunos de ellos se logra el reconocimiento legal, o por lo menos, mantener la tenencia de la tierra.

También los movimientos urbanos se robustecen en Uruapan, Morelia, Zacapu, Zitácuaro, ciudad Lázaro Cárdenas y Apatzingán. En un caso, el de Zacapu, un peculiar panismo de base popular alcanza el triunfo municipal en 1980 a partir de la organización de colonias cuyo dirigente, Lorenzo Martínez, es hoy paradójicamente diputado federal por el PRD. A fines de 1982, se vertebró la Coordinadora de Universitarios en lucha en la Universidad. En la meseta tarasca surge la Organización de Productores Purépechas y en la zona de tierra caliente la CIOAC alcanza su apogeo. Este proceso de agrupamiento es resultado del trabajo paciente de militantes con o sin partido, que organizan desde abajo, y

desde luego, es efecto de la decisión de lucha de las masas.

La fase expansiva del movimiento independiente termina, sin embargo, hacia la segunda mitad del sexenio de Cárdenas. Después del auge, la represión, la mediatización de las demandas o los errores de las dirigencias orgánicas van conduciendo paulatinamente al debilitamiento del movimiento popular independiente de Michoacán. En este aspecto, su curva se sincroniza con la del movimiento nacional, el cual inicia también su fase descendente después de junio de 1983. En Morelia, el gobierno estatal reprime al Campamento Tierra y Libertad y a la Unión Popular Solidaria; la UCEZ pasa a una fase defensiva en la que no lucha ya tanto por la posesión de la tierra sino por la liberación de los comuneros presos en todo el estado.²⁰ En 1984, la UCEZ se aleja de la CNPA y un año después sufre una importante división en su dirigencia. Por problemas partidarios de su principal dirigente en Apatzingán, Daniel Sánchez Pérez, con el PSUM, la CIOAC se diluye y algunas de sus bases pasan al oficialismo. En la Universidad el movimiento democrático, que había arrancado una nueva y avanzada Ley Orgánica es derrotado justo al finalizar el gobierno cardenista y por los errores de éste. La democratización universitaria queda trunca y el aparato se conserva en manos de la misma (o casi) burocracia que había controlado a la institución durante los 20 años anteriores.

Así, la erupción popular de 1988 no es efecto del ascenso lineal de los organismos sociales sino de las derrotas parciales de éstos en los años inmediatos anteriores. Por novedad del carácter electoral con que se presentó la nueva insurgencia, del cual había carecido, la mayoría de las organizaciones tienden a ocultar el trabajo de base que subyace en cada ejido, comunidad, colonia o sindicato.



Las masas estaban ahí, con sus dirigentes naturales, educadas en una línea de oposición al gobierno y al PRI, pero sus organizaciones sociales estaban en el pliegue al que las había forzado la ofensiva de los gobiernos federal y estatal, particularmente recrudescida en los dos años de Martínez Villicaña, o por sus propios errores. Esperaban el momento de reagruparse y pasar nuevamente a la ofensiva, oportunidad que se presentó con la división en el priísmo y la candidatura, familiar

para ellas, de Cuauhtémoc Cárdenas. Éste significaba más allá de la nostalgia por los tiempos idos, algo que el movimiento reivindicativo nunca había puesto en su orden del día: la democratización política y, sobre todo, la oportunidad de fustigar a un gobernador aborrecido y de derrotar al PRI.

El 2 de julio y las perspectivas inmediatas

Para enfrentar el desafío que la población michoacana planteó al régimen el 6 de julio, se requería una operación de cirugía mayor. Y eso fue precisamente lo que se preparó y realizó para las elecciones legislativas locales del 2 de julio de 1989. Se trataba de extirpar el cáncer del cardenismo o, por lo menos, aislarlo para impedir su crecimiento.

Apenas entró Salinas de Gortari al poder y Martínez Villicaña fue removido, el gobierno comenzó a desplegar su estrategia para la recuperación de Michoacán, fincada en tres aspectos:

- a) Hostilizar y dividir al FDN como frente electoral,
- b) preparar un macrofraude y
- c) volcar recursos económicos masivos a las campañas priístas y obras públicas a través del llamado "Plan Michoacán".

Simultáneamente, había que crear la apariencia de reestablecimiento del PRI para darle credibilidad a su pretendido triunfo.²¹

El Plan Michoacán, firmado por el gobierno estatal y cinco secretarios del Gobierno Federal, se anunció como el primer *Plan Presidencial* especial de Salinas de Gortari con la finalidad de crear empleos, instalar agroindustrias, construir viviendas, mejorar las comuni-

caciones, continuar con la electrificación y dar apoyo a las actividades agropecuarias mediante riego, créditos y comercialización. Con un presupuesto aproximado de dos billones de pesos (que no comenzaron a llegar sino tardíamente y por goteo), se evidenció inmediatamente como un plan de recuperación electoral.

Las relativamente pocas obras que se inauguraron o echaron a andar fueron entregadas a la población no por el gobierno sino, como es usual en estos casos, por los candidatos priístas a diputados. Destacó, sobre todo en las colonias populares, el reparto de tortibonos y la instalación de lecherías que venden a precios casi de regalo.

A pesar del plan tan pomposamente publicitado, pero siempre insuficiente para cubrir las necesidades de la población del estado, el 2 de julio se demostró en las urnas que las preferencias políticas de los electores no se habían modificado sensiblemente en favor del PRI. La votación, indudablemente, no fue tan copiosa como un año antes, pero sí definitivamente contraria al PRI.²² Por eso, si bien el partido oficial no había logrado reestructurarse desde las bases, aunque así lo hubiera pregonado, sí había preparado un dispositivo descomunal de fraude que le permitiera si no un (ya impensable) carro completo, sí una mayoría relativa en el Congreso. Fue, como algunos periodistas lo calificaron, un fraude cínico que dejó inescrupulosas evidencias por todas partes.²³

Dada la importancia del caso y por múltiples indicadores en ese sentido, es indudable que el fraude del 2 de julio fue diseñado y preparado en los altos niveles de la dirigencia nacional priísta. Así, en el discurso en que Luis Donald Colosio reconoció la derrota de su partido ante el PAN en Baja California, se patentizó la decisión política de no ceder en Michoacán. Asimismo, fue significativo que se promoviera a puestos en el Comité Nacional del PRI a José Guadarrama Márquez, delegado

en este estado y autor material del fraude, y a algunos militantes cuyo mérito fue defender en los medios de prensa la actuación de su partido en Michoacán, como Miguel Ángel Yunes, Abraham Talavera y César Augusto Santiago.

Para el PRI, las elecciones tenían una significación vital. El reconocimiento de una nueva derrota en Michoacán hubiera implicado permitir la consolidación de su oposición más poderosa en un estado completo, y un aliciente para el robustecimiento del PRD en la escala nacional, así como el riesgo de un gobierno local acotado por el Congreso o, peor aún, amenazado por éste de deposición. El grupo Salinas no se engañaba a este respecto. Su enfrentamiento es con las masas populares, y no se salvará con una simple recomposición política pactada con la burguesía local, como en Chihuahua. El fraude se proponía, como alternativa viable de poder, golpear a fondo la voluntad de lucha de los michoacanos, desmoralizar, desgastar al enemigo hasta quebrantarlo. Se trataba de una vieja táctica del prismo probada en múltiples batallas consistente en crear con la cerrazón un desánimo que orille al adversario a acciones extremas, siempre aisladas y susceptibles de ser reprimidas, o que lo obligue a retirarse de la lucha.

Las masas perredistas tampoco se engañan. Desatan sus fuerzas colectivas, se identifican nuevamente en el fragor del enfrentamiento y radicalizan su posición contra el PRI. A diferencia del pasado, ni esperan lineamientos de su dirección ni se someten al control de ésta. Inauguran métodos de lucha. Con su movilización en plantones y cierres de carreteras, son las masas las que empujan a la dirección partidaria, la cual en un primer momento se orienta a defender sus triunfos sólo en las instancias legales, sin apelar a la acción de las bases.

Lo relevante de julio y agosto de 1989 es la presencia de las masas que tienden a ocupar todos los

espacios, urbanos y rurales, en la defensa del voto. Ante esa presencia se desmorona el movimiento cívico como un brote aislado producto de la desesperación de pocos. Las elecciones de este año encontraron a las masas con el ánimo exaltado por sus victorias del 6 de julio y la de noviembre-diciembre contra Martínez Villicaña: 37 días en plantón frente al Palacio de Gobierno, tomas de carreteras en todas las regiones del estado, protestas en todas las cabeceras distritales y casi en todas las municipales, y la toma de 67 presidencias municipales dan su testimonio.

La iniciativa popular contrasta con una dirección partidaria temerosa y vacilante, que intenta primero frenar la movilización y, presa de su propia confianza, se queda paralizada ante la magnitud del fraude, sin acertar a asumir las medidas necesarias para enfrentarlo. El Comité Nacional demora 15 días en reunirse y algunos más en elaborar su plan de acción. La amorfa dirección estatal intenta, sin lograrlo, negociar con el gobierno el levantamiento de los plantones. Incluso una manifestación como la del 30 de julio, en Morelia, que congregó a 100 mil personas, queda sin efectos prácticos inmediatos; el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas se mantiene en la lógica de la institucionalidad rota desde arriba por el fraude del gobierno y el PRI, y desde abajo por las masas actuantes. Su conflicto no consiste en decidir cómo darle dirección al movimiento popular que lo sustenta, impedir su desgaste y avanzar, sino tan sólo en la decisión de participar o no en las instancias legales.

En Michoacán se han mostrado prematuramente los límites de la apertura a la voluntad popular ofrecida por el Gobierno Federal. Ahí la posición es de endurecimiento y cerrazón contra una masa a la que no controla ni logra ya manipular. El fraude no va dirigido contra un partido sino contra la participación del pueblo, inclusive en los espacios locales. No logra su cometido sin pagar

un alto precio político. Por eso aquí se ha cerrado el ciclo de legitimación intentado por Carlos Salinas de Gortari en el inicio de su gobierno.

Por otro lado, esta experiencia ha mostrado a un PRD prisionero de sus contradicciones. En la disyuntiva de erigirse como partido de oposición dentro del régimen o como el partido de la sociedad contra el régimen,²⁴ se ha impuesto la lógica del respeto a los procedimientos institucionales: participación en el Colegio Electoral y, posteriormente, en la Cámara de Diputados.²⁵

El fraude puede, en el corto plazo, desalentar en un importante sector de ciudadanos la participación en los próximos comicios. En otros, la irritación podrá expresarse en un mayor encono y voluntad de movilización y de lucha. En cualquier caso, la legitimidad perdida por el PRI y por el régimen político es irrecuperable, porque las experiencias de la campaña presidencial de 1988 y de los fraudes del 6 de julio de ese mismo año, y del 2 de julio de 1989 quedaron ya profundamente grabadas en la sociedad, y se ha reforzando la confianza de las masas populares en sus propias fuerzas y la desconfianza en sus gobernantes actuales.

Notas

- 1 El "Documento de Trabajo No. 1", firmado por el entonces denominado Movimiento de Renovación Democrática del PRI, fue presentado en Morelia el 1 de octubre de 1986, en una conferencia de prensa donde participaron los más destacados de sus promotores en ese momento.
- 2 Entre los fraudes más graves se cuentan los cometidos en 1983 contra el PSUM en las elecciones municipales de Chilchota y Copándaro.
- 3 Véase, por ejemplo, acerca de los conflictos internos del PRI en este periodo: Jesús Tapia Santamaría, "Elecciones locales en Michoacán en 1983", en *Nueva Antropología*, vol. VII, núm. 25, octubre de 1984.

4 Intervención de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la Asamblea Estatal del PRI, el 30 de junio de 1984.

5 "Me he querido retirar de Michoacán para evitar una provocación: Ovando", por René Delgado, en *La Jornada*, 9 de septiembre de 1988.

6 Por ejemplo, el candidato priista perdedor por el distrito I de Morelia, Marco Antonio Aguilar Cortés, diagnosticó: "La gente no votó a favor de los candidatos del FDN sino en contra del sistema", y agregó, aludiendo a las simplistas explicaciones que Martínez Villicaña prodigaba por aquellos días a la prensa: "Quien quiera buscar una sola causa en ello, en lo que acaba de ocurrir, se equivoca, porque en esto hubo una serie de causas y de motivos", *La Voz de Michoacán*, 11 de julio de 1988.

7 El número varía entre 42 y 67, según la fuente a la que se recurra. En muchas municipalidades la toma no se consumó y sólo se instalaron "plantones" de cardenistas. La información disponible no permite hacer un listado completo de las alcaldías ocupadas por la disidencia.

8 Genovevo Figueroa es un político local que se formó en la Universidad Michoacana; fue presidente de la Federación de Estudiantes de dicha Universidad (FEUM) en 1963, año en que se dio el conflicto entre el gobierno estatal de Agustín Arriaga Rivera y el rector Eli de Gortari. Figueroa Zamudio se colocó a la cabeza de todas las corrientes estudiantiles que defendieron el rectorado de De Gortari, finalmente depuesto arbitrariamente. Llegó a ser rector en los años setenta, diputado federal, diputado local y secretario de gobierno con Martínez Villicaña.

9 Los datos corresponden a la elección de senadores.

10 En las elecciones municipales de 1986, el PARM había registrado planillas en sólo nueve de los 113 municipios del estado, y su votación alcanzó únicamente el 0.5% del total. En la elección de gobernador de ese mismo año obtuvo el 0.7%

11 En Nueva Italia, en el corazón de la tierra caliente, una asamblea de 5 mil campesinos pertenecientes a 68 ejidos de la región decidió colectivamente abandonar la CNC para incorporarse a la nueva central. *La Jornada*, 24 de abril de 1988.

12 *La Voz de Michoacán*, 26 de abril de 1989.

13 *La Voz de Michoacán*, 16 de abril de 1989.

14 *La Jornada*, 16 de abril de 1989.

15 *La Voz de Michoacán*, 6 de abril de 1989.

16 Entre otras movilizaciones pueden mencionarse el encuentro de la UCEZ: "De la Dignidad del Indio", el 7, 8 y 9 de abril de 1989, en el Monte de las Cruces, que culminó con una marcha en el D.F. al monumento a la Revolución, el Zócalo y la Secretaría de la Reforma

- Agraria, donde se mantuvo un plantón de dos días; un encuentro, del 26, 27 y 28 de agosto, en la comunidad de Ixtaro, municipio de Salvador Escalante, seguido de una marcha y un plantón en Morelia. También se tomaron las oficinas de la Reforma Agraria en Morelia, en agosto de 1988, y en Uruapan, en julio de 1989, en demanda del cambio de los delegados respectivos.
- 17 Con todo, no es ésta la única versión surgida del oficialismo. Con igual superficialidad, el entonces gobernador Luis Martínez Villcaña explicó a los medios que los michoacanos votaron por Cuauhtémoc Cárdenas por su oriundez, y otros priistas atribuyeron el triunfo de los candidatos frentistas en las elecciones para diputados y senadores a que el pueblo votó por los candidatos que le eran más familiares y a los que hasta poco tiempo antes el PRI había dado a conocer en todo el estado. Nunca, desde luego, se aceptó que el voto cardenista tuviera una explícita significación antipriista.
- 18 Ésta es, señaladamente, la deficiencia del análisis, por lo demás sugerente y acertado, de Jorge Zepeda: "Desde Michoacán. Cuatro reflexiones sobre dos partidos y una infamia", publicado simultáneamente por *La Voz de Michoacán* y *La Jornada*, 6-10 de agosto de 1989. Debe quedar claro que describir la base social de un movimiento político no es caracterizar su esencia, la cual más bien se define en los planos ideológico y programático.
- 19 Eduardo Nava Hernández, *Cultura política y popular en Michoacán. Notas para su estudio*, Escuela de Economía UMSNH, Morelia, Serie *Documentos* núm. 12, febrero de 1989.
- 20 Jorge Zepeda, "No es lo mismo agrario que agrio. La Unión de Comunereros Emiliano Zapata, de Michoacán", en *Estudios Políticos*, nueva época, vol. 3, núm. 2, FCP y S, UNAM, México, abril-junio de 1984, pág. 81.
- 21 Cfr. Pascal Beltrán del Río, "Colosio, ocupadísimo en preparar las apariencias de triunfo en Michoacán", en *Proceso* núm. 651, 24 de abril de 1989.
- 22 Inclusive si se toman las cifras presentadas por la Comisión Estatal Electoral y el PRI, se tiene que este último obtuvo sólo el 45% de la votación, mientras el PRD se adjudicó el 40.48%, el PARM el 4.32 y la Coalición Popular Cardenista (PPS-PFCRN) el 3.13%. La votación sumada de los partidos que en julio de 1988 integraban el FDN es de 47.93%, superior en casi tres puntos a la del PRI.
- 23 Véanse los reportajes de Pascal Beltrán del Río en *Proceso*, núms. 662 y 663, del 10 y 17 de julio de 1989, respectivamente. Asimismo, la opinión de la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo (Adese) en *La Jornada*, 11 de agosto de 1989, y del Tribunal Independiente de Ciudadanos, *La Jornada*, 13 de agosto de 1989.
- 24 Adolfo Gilly, "Partidos: El PRD", en *La Jornada*, 9 de septiembre de 1989.
- 25 El 30 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas anunció solemnemente que su partido no participaría en el Colegio Electoral del Congreso michoacano, porque "significaría legitimar el fraude y admitir que el único camino abierto para la oposición es la complicidad. No seremos ni testigos complacientes ni socios del delito electoral".